



ORIGEN DEL REGIMEN ACTUAL	1
LOS OBJETIVOS DEL GOLPE DE ESTADO	5
EL PROYECTO POLITICO DEL REGIMEN	7
LA COYUNTURA ACTUAL	12
LA CONTRAINSURGENCIA QUE NO AVANZA	23
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO	25



GUATEMALA, 8/XI/82



## ORIGEN DEL REGIMEN ACTUAL.

El origen causal del actual régimen guatemalteco debe ser buscado en la profunda crisis surgida y desarrollada en los últimos años - al interior de los tres factores de poder en el país.

### EL ESQUEMA POLITICO DE LOS ULTIMOS AÑOS

Durante los últimos diecinueve años, la conjunción de intereses y la armonía entre la clase dominante guatemalteca, el ejército y el imperialismo norteamericano, dió como resultado un esquema político caracterizado por la hegemonía del ejército en el ejercicio del poder. El 31 de marzo de 1963, mediante un golpe de estado encabezado por el entonces Ministro de la Defensa, coronel Peralta Azurdia, el ejército como institución se hacía cargo del poder, iniciándose una etapa de participación creciente de los jefes militares en la administración del estado.

A partir de entonces, el poder real ha venido siendo ejercido por la alta camarilla militar, con el irrestricto apoyo de la clase dominante y el gobierno norteamericano. Todos los gobiernos han estado presididos por militares, a excepción del período 1966-1970 en que el ejército entregó el poder formal al Licenciado Julio César Méndez Montenegro, reservándose el poder real.

Todo este período, caracterizado por una fuerte represión hacia los sectores populares y hacia los sectores y tendencias políticas progresistas, significó también un notable fortalecimiento del ejército, de la clase dominante y de la presencia imperialista.

en el país. Gracias al "clima favorable para la inversión" creado por los gobiernos represivos, y a los altos precios de los productos de agroexportación guatemaltecos en el mercado internacional, la oligarquía terrateniente incursionó en actividades industriales, financieras y comerciales. Se incrementaron de manera significativa las inversiones de las transnacionales norteamericanas; especialmente en los rubros de minería, hidrocarburos, turismo y gran comercio. Los altos oficiales del ejército, por su parte, aprovechándose de los privilegios y prebendas que otorga el aparato del estado, se fueron enriqueciendo de manera vertiginosa, llegando algunos de ellos a incrustarse entre la más adinerada oligarquía. Al mismo tiempo, el ejército, se cohesionaba cada día más graníticamente en torno a la más reaccionaria ideología y práctica contra insurgente.

#### CRISIS Y DISPERSION DE LOS FACTORES DE PODER.

Ese proceso iniciado en 1963 comenzó a verse afectado significativamente desde finales de los 70, al ir tomando mayor fuerza y proyección el movimiento revolucionario en el país. El desarrollo de la actividad insurgente fue desgastando progresivamente ese esquema de poder político, creando fuertes contradicciones en su interior, que para inicios de 1982 presentaba ya características de dispersión.

La ineficiencia del ejército en los últimos años para neutralizar militarmente la insurgencia, hizo surgir progresivas críticas y reprimaciones de la clase dominante, que con toda razón percibía cómo la situación escapaba cada día al control de aquél. La respuesta del ejército fue la amenaza y las inculpaciones a la oligarquía, en el sentido de que ella era la responsable de la crítica situación del país, por su voracidad y excesiva explotación a los sectores populares.

Por otra parte, la represión sistemática y progresiva implementada por los sucesivos regímenes guatemaltecos hizo crisis a poco de establecerse la Administración Carter en los Estados Unidos, en su política de Derechos Humanos. Desde 1977, Guatemala dejó de percibir la ayuda militar norteamericana. En 1980, los Estados Unidos retiraron a su embajador en Guatemala, por ser excesivamente condescendiente con los abusos del régimen de Lucas García; el gobierno guatemalteco negó el plácet al nuevo embajador propuesto por Washington, al que señalaba como "activista de los Derechos Humanos", y transcurrieron largos meses de enfriamiento diplomático hasta que la Administración Reagan nombró al nuevo representante diplomático. Sin embargo, la nueva administración norteamericana se cuidó mucho de comprometerse abiertamente con el régimen guatemalteco.

Al producirse ese retiro de apoyo por parte de la clase dominante y el gobierno norteamericano hacia el ejército guatemalteco, se llegaba al resquebrajamiento y desintegración de una estrategia política que había tenido vigencia durante 19 años.

En vísperas de las elecciones de 1982, en esa situación de relativo vacío de poder, el gobierno de Lucas García, afrontaba las derrotas políticas y militares que le infligía el movimiento revolucionario, sufría el más desolador aislamiento internacional; y se hallaba al borde del colapso económico, debido a los bajos precios de los productos guatemaltecos en el mercado internacional, a la baja de producción en esos mismos rubros, al cierre de empresas, a la fuga de capitales, a la caída del turismo, y a la retracción de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

LAS ELECCIONES  
DE MARZO DE 1982

En este contexto, las elecciones del 7 de marzo se presentaban como un angustioso intento de encontrar nuevas alternativas que permitieran estabilizar la situación y restablecer la armonía perdida

entre los tres factores de poder. Las cuatro candidaturas dirigieron gran parte de su propaganda precisamente a ganarse el favor de esos factores. La oligarquía y el imperialismo se abstuvieron de explicitar su apoyo a ninguno de los candidatos; aunque el Departamento de Estado no ocultó su desagrado ante la eventualidad de la imposición del candidato oficial por parte del ejército; consideraban que la realización de elecciones libres era un requisito indispensable para la articulación de un relanzamiento efectivo de la política contrainsurgente.

Para las capas medias y populares, el proceso electoral significaba la culminación de todo un proceso de negación de los derechos políticos ciudadanos; eran unas elecciones, donde, paradójicamente, no había dónde elegir. La expectativa progresista y democrática había sido cerrada definitivamente con la eliminación física de los dirigentes Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr y con el estrangulamiento de toda oposición, en una progresiva radicalización y polarización del sistema hacia las posiciones más ultrarechistas y conservadoras. Prueba de la apatía popular fue el apenas 20% de población votante que acudió a las urnas.

La camarilla militar en el poder decidió mantener su hegemonía, ya de espaldas y en contra de la oligarquía y el imperialismo, y otorgó el triunfo electoral a su candidato, el general Guevara Rodríguez. La oligarquía rechazaba positivamente a Guevara y a la camarilla luquista por su escandalosa corrupción y su eneficacia contrainsurgente. Para el imperialismo supondría un enorme costo político a nivel internacional entrar a negociar con un gobierno surgido de un evidente fraude electoral.

En otras palabras, las elecciones y su resultado vinieron a profundizar más aún la dispersión entre los factores de poder, en un contexto en que no podrían sostenerse frente a la insurgencia armada y las fuerzas progresistas si se presentaban separados, y mucho menos enfrentados.

## LOS OBJETIVOS DEL GOLPE DE ESTADO

Los golpistas del 23 de marzo declararon desde el primer momento - que estaban imbuídos de una "concepción auténticamente democrática", y que buscaban un "mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías marginadas". Según ellos, se habían decidido a dar el golpe de estado "ante la grave situación por la que atraviesa nuestro país, debatiéndose entre el hambre y la miseria, subyugado por una minoría corrupta que ha sojuzgado a nuestros compatriotas a base de terror y corrupción, aislándonos del resto del mundo..."

Resultaba con cierto punto de ironía que el ejército presentara el golpe de estado como una respuesta a las aspiraciones populares, - siendo así que él mismo, especialmente en los últimos 20 años, ha sido el garante de la conculcación de los derechos de los ciudadanos y el responsable del terror y la corrupción que denunciaba, habiendo ejercido el poder en forma totalmente irrespetuosa y despótica hacia la mayoría de los guatemaltecos.

Las verdaderas causas del golpe de estado estaban delineadas nítidamente en la crisis generalizada que, bajo distintos aspectos, afectaba al sistema de explotación en Guatemala. La piedra de toque en esa situación venía dada por la presencia y desarrollo del movimiento revolucionario. Desde ese punto de vista, el golpe perseguía varios objetivos, todos ellos íntimamente relacionados y encaminados a hacerle frente a la situación de insurgencia.

En primer lugar, se perseguía el realineamiento de los tres factores de poder. Después del escandaloso fracaso de las elecciones, - a la clase dominante y el imperialismo no les quedaba otra alternativa que derrocar a la camarilla luquista-guevarista mediante un golpe de estado sorpresivo.

En segundo lugar, se trataba de conseguir una mejor imagen para - superar el aislamiento internacional que padecía el régimen luquis.

ta por su indetenible espiral represiva -13,500 muertos sólomente en 1981-. Todo hacía preveer que, con el ascendo del general Guevara a la presidencia, la política de masacres degeneraría en una matanza indiscriminada. Si junto a ello, como era previsible, se producía un salto en el movimiento revolucionario, el conflicto - podría agudizarse de manera muy sensible en el país. Esto compli caría enormemente la situación en el área para la administración norteamericana, ya que le impediría maniobrar cómodamente la si- tuación, al tener otro frente abierto; además, para su política - regional, los Estados Unidos necesitaban aliados en mejores con- diciones políticas que Lucas y Guevara, que más bien constituían- estorbos.

Otro de los objetivos del golpe era conseguir un repunte en la mo- ral del ejército; ésta había descendido a límites peligrosos para marzo del 82, después de haber recibido alrededor de 3200 bajas - en 1981 y después de haber estado durante siete meses en una ofen- siva estratégica contra el movimiento revolucionario sin conse- - guir victorias significativas. La falta de éxitos militares ha- cían necesaria alguna maniobra publicitaria para levantar esa mo- ral.

El deterioro de la camarilla luquista por el fraude electoral y el descontento al interior del ejército por la relativa autonomía - que había adquirido esa camarilla, facilitaban la maniobra. Así, se hizo recaer sobre su corrupción e incapacidad el origen de las derrotas y la desenfrenada represión; su derrocamiento y la insta- lación de un "gobierno del ejército" le daría a éste una mayor co- hesión y una nueva razón por la que luchar. A pesar de los incon- venientes de tipo político que entrañaba el golpe de estado, tan- to a nivel nacional como internacional, se consideraba que este - objetivo lo justificaba por sí mismo.

Con el derrocamiento de la camarilla luquista-guevarista se pre- tendía también ampliar la base de apoyo político, tanto a nivel - nacional como internacional, para la contrainsurgencia. Para

ello se quiso presentar el golpe como un movimiento de los oficiales jóvenes honestos, con el objeto de publicitar una imagen del ejército como una institución limpia frente a la "minoría corrupta". Sin embargo, si bien es cierto que fueron destituidos varios altos oficiales, la estructura represiva del ejército permaneció intacta.

Finalmente, el golpe de estado tenía también como objetivo detener el crack económico que amenazaba al país. A pesar de la desinformación proporcionada por el ejército, la clase dominante estaba llegando al pánico por su apreciación de la inestabilidad política del país. Las inversiones se habían retraído por completo y la fuga de capitales era masiva. Las reservas monetarias pasaron de 743 millones de dólares en octubre de 1979 a 81 millones en octubre de 1981; sólo en una semana de septiembre del 81 salieron del país 119 millones. La tasa de crecimiento del PNB descendió del 3.4% en 1980 al 1.5% en 1981, y la producción agrícola descendió en un 25%. Por primera vez en este siglo, el presupuesto general del estado fue rebajado para el ejercicio fiscal 81-82 con relación al ejercicio anterior. Todo ello, junto a la disminución del mercado interno y regional, había situado a la economía del país al borde del colapso.

Esos eran realmente los objetivos del golpe de estado, que encontraba terreno abonado en las contradicciones no resueltas entre la clase dominante y la camarilla luquista, en la corrupción, voracidad y criminalidad de ésta, en el evidente fraude electoral, y en los resentimientos, frustraciones y desmoralización al interior del ejército.

#### EL PROYECTO POLITICO DEL NUEVO REGIMEN

Existe un documento titulado "Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo", fechado el 1 de abril de 1982 y firmado por la entonces Junta Militar; sus páginas, arriba y abajo, van marcadas con el calificativo "secreto". En ese documento se contiene lo que podría ser el

proyecto político del régimen surgido del 23 de marzo.

Comienza el documento con una constatación: "Se ha comprobado que con sólo acciones militares no se erradica definitivamente la acción subversiva... Las injusticias sociales, rivalidades y oposiciones políticas, el descalabro económico, los dramas de miseria y hambre, la desocupación y la pobreza, son, entre otros, los motivos principales que indudablemente la alimentan".

Bajo el epígrafe "Problemas a enfrentar", el documento reconoce que "en los actuales momentos, la estabilidad política, económica, psicosocial y militar se encuentra deteriorada significativamente". "En el campo económico se está pasando por la más grave crisis de los últimos 10 años". También se lamenta la "falta de colaboración de los terratenientes, al no respetar ni cumplir con el salario mínimo, las condiciones sanitarias y de seguridad para el campesino, colonos o asalariados". "En el campo militar los efectivos, armamento y equipo del ejército de Guatemala, según la organización actual, no son adecuados para cubrir los diferentes frentes presentados por la subversión armada; los éxitos del ejército frente a los focos guerrilleros no reflejan un debilitamiento significativo (de éstos) que permita pronosticar su erradicación a corto plazo, si esto se hace aisladamente".

Curiosamente, un ejército con 20 años de experiencia contrainsurgente reconoce que no cuenta con efectivos, armamento, equipo y estructuras adecuadas; por otra parte, después de haber proclamado una y otra vez en los últimos meses las derrotas y prácticamente el aniquilamiento del movimiento revolucionario, resulta que no se puede pronosticar su erradicación a corto plazo...

El objetivo del "Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo" es "establecer directrices para alcanzar el desarrollo del país dentro de un marco de seguridad racional y efectivo". Las "acciones de aplicación" están divididas en 4 campos: político, económico, psicosocial y militar. Cuantitativamente, las acciones en el cam

po militar abarcan sobre el papel un tercio más de amplitud que las de los otros tres campos juntos; pero, además, las medidas políticas, económicas y sociales, tienen también un contenido esencialmente -- contrainsurgente. Veamos.

En el campo político se recomienda "crear al más alto nivel un organismo de dirección del esfuerzo antisubversivo, que conforme las políticas nacionales correspondientes, imparta las instrucciones y directivas generales, integre las medidas acordadas en cada campo y coordine eficazmente su realización".

En el campo económico se recomienda dar atención prioritaria con medidas de urgencia a las áreas que por sus situaciones económicas de deficientes tengan "alta posibilidad de surgimiento de situaciones -- contribuyentes a la subversión". Así mismo, se recomienda dar seguridad a las fuentes de producción y neutralizar o reducir los efectos que la subversión pueda producir en este campo.

En el campo psicosocial, se recomienda "estructurar y determinar el nacionalismo... como doctrina opuesta al comunismo internacional".

Las acciones en el campo militar contemplan una amplia gama: mejoramiento de la organización del ejército y de los cuerpos de seguridad interna; la celebración de encuentros regionales para "intercambio de experiencias antisubversivas"; la concertación de acuerdos -- para asegurar "un intercambio efectivo en asuntos antisubversivos"; optimización de la central de inteligencia, la que habrá que modernizar y "extender su acción a todos los rincones del país e internacionalmente"; localización e identificación de los grupos subversivos, con sus características y actividades; obtención de "informaciones extranacionales sobre personalidades y actividades subversivas"; determinación de los "países, instituciones y organismos que promueven y apoyan los movimientos y grupos subversivos"; obtención de información sobre "medidas y acciones exitosas antisubversivas -- que se hayan aplicado en otros países"; orientación al organismo de

propaganda "para que neutralice las banderas y razones esgrimidas por la subversión en todos los campos y áreas; la acción psicológica deberá promoverse a nivel nacional a todos los estratos sociales, haciendo énfasis en el campesino y población analfabeta".

El documento finaliza con las "acciones de aplicación inmediata", que copiamos textualmente: "Dirección centralizada del esfuerzo antisubversivo. Diseminación de las normas apropiadas a todos los campos del poder nacional. Mayor capacidad legal y funcional a los organismos antisubversivos. Mejoramiento del esquema operacional del ejército y de los cuerpos de seguridad interna. Incremento del esfuerzo de inteligencia y establecimiento del esquema de control poblacional. Incremento y aplicación de la acción psicológica a todo nivel. Promoción y participación en reuniones, conferencias y seminarios antisubversivos. Recuperar y asegurar el funcionamiento de las estructuras y actividades económicas. Detección de las condiciones contribuyentes a la subversión y promover su atención prioritaria. Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad física. Fortalecimiento del poder nacional en los campos respectivos".

Según este documento, el régimen golpista -y la alta jerarquía militar detrás de él- percibían la situación del país como sumamente delicada por efecto de la acción revolucionaria. Sin embargo, para enfrentar la situación no se pensó en adoptar medidas de tipo socio-político y económico, sino que se decidió exclusivamente la vía militar. Ni siquiera se esforzó el nuevo régimen por implementar una mínima cobertura para lograr alguna movilización de la ciudadanía en apoyo a su proyecto. Cuando se esperaba algún planteamiento programático, todo se quedaba en promesas de trabajar, en declaraciones de manido patriotismo, en autoexaltación de las capacidades de las fuerzas armadas, en exabruptos contra los "subversivos", en empeñar perjuras palabras de honor...

El día 5 de abril se hacían públicos los "14 puntos programáticos" del nuevo régimen, que en realidad no eran otra cosa que una decla

ración de principios y de buenas voluntades, en la línea del "Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo". En él se expresaban los deseos de los golpistas de "hacer sentir a los guatemaltecos que la autoridad está al servicio del pueblo", de "lograr la tranquilidad y seguridad", de "recuperar la dignidad individual", de "fortalecer la integración nacional", de "mejorar el nivel de vida de la población", etc.

En el mes de junio el régimen decretó una amnistía general para los guerrilleros que depusieran las armas y se entregaran al ejército. Esta maniobra del gobierno, destinada a ganarse el favor del Congreso norteamericano, no tuvo efectos reales en el país, pues las organizaciones revolucionarias rechazaron esta maniobra que se daba en medio de las más atroces masacres contra la población civil. Mientras los voceros del régimen afirmaban que cerca de 2000 "subversivos" se habían acogido a ella, las organizaciones revolucionarias no reportaron que alguno de sus miembros se hubiera entregado al ejército. En cualquier caso, el decreto de amnistía servía de pretexto para implantar el estado de sitio el 1 de julio, con lo que se incrementaban "legalmente" las acciones de contrainsurgencia y represión.

Hasta la fecha, el régimen no ha presentado ningún programa concreto de acción ni ha puesto en marcha ninguna medida destinada a transformar la grave realidad del país. Parecería que los grandes problemas políticos, económicos y sociales están reservados a los mensajes dominicales de Ríos Montt, que en tono espiritualizante e intimista trata de demostrar que el origen de todos ellos, y por lo tanto su solución, está en el corazón de cada guatemalteco; pretende crear un artificial clima de reconciliación nacional y de conversión a los valores de paz social, manipulando los sentimientos humanos y religiosos de la población. Pero el pretender soslayar los graves cuestionamientos que nacen de la realidad, respondiendo con un paternalismo gubernamental trasnochado, es un craso error político. Es por ello que el régimen golpista comenzó a deteriorarse desde el mismo momento de su instalación.

## LA COYUNTURA ACTUAL

A seis meses del golpe de estado, las expectativas suscitadas por él, así como sus objetivos, no parecen haberse cumplido del modo deseado.

### EL AISLAMIENTO INTERNO

La iniciativa privada guatemalteca, que se ha caracterizado históricamente por su escaso desarrollo político y por apoyar sistemáticamente toda política de fuerza que vaya a defender sus intereses, acogió con satisfacción el golpe de estado. Inmediatamente consiguió una suavización en los mecanismos para la adquisición de divisas, limitada por un control de cambios que estaba vigente desde hacía varios meses. Pero poco más pudo ofrecer el nuevo gobierno.

Los terratenientes se ven afectados por la baja de precios del café y el azúcar en el mercado internacional, así como por el congelamiento del mercado del algodón -los tres principales productos de exportación-. A poco de instalarse el nuevo gobierno, este sector terrateniente solicitaba préstamos por un monto de 200 millones de dólares para levantar la presente cosecha, a lo que el gobierno sólo pudo responder con una línea de crédito de 10 millones.

El sector industrial arrastra su crisis desde hace ya varios años. Con el Mercado Común Centroamericano prácticamente cerrado y un mercado interno sustancialmente reducido por la escasa capacidad de compra de la mayoría de los guatemaltecos, la incipiente industria no sólo no ha podido consolidarse, sino que ha entrado en una progresiva dinámica de quiebras y cierres. La misma situación influye en el gran comercio, afectado también por la devaluación de hecho de la moneda nacional, la escasez de divisas y las restricciones impuestas por el gobierno a la importación de numerosos ar-

títulos. La actividad financiera se ha ido deteriorando progresivamente hasta llegar a la paralización por la ausencia total de inversiones.

Según datos proporcionados a mediados de julio por el Ministerio de Finanzas, la deuda pública total, incluidas deuda externa e interna, ascendía a la fecha a 2.134.558,000 dólares, y las reservas netas eran de 47.400.000 dólares. Por las mismas fechas, el Ministro de Economía declaró que Guatemala afrontaba una de las más graves crisis integrales de su historia; crisis más grave que la de los años 30, pues son más graves los volúmenes de dinero y los problemas, y más complejas las soluciones. Agregó el Ministro que en ella influye el desprestigio internacional del país, "reflejado en la falta de créditos externos y la negación de ayuda de algunos países que tradicionalmente habían estado de nuestro lado". Por otra parte, las estimaciones señalan que en 1982 el PNB descenderá en 3.5%.

Recientemente, Ríos Montt anunció que los empresarios tendrían que organizar su propia defensa civil y consteársela, pues el ejército no podía ya proporcionar este servicio como venía haciéndolo tradicionalmente, por estar totalmente dedicado al combate contrainsurgente.

Uno de los puntos tradicionales de conflicto entre la clase dominante y los gobiernos de Guatemala ha sido la cuestión fiscal, pues aquella por sistema ha regateado de mil formas el pago de impuestos. En estos momentos el problema se presenta con una agudeza extraordinaria. Por una parte, para combatir la insurgencia con objetivos a largo plazo, el régimen necesitaría -en caso de desearlo- impulsar una reactivación económica, una baja en el costo de la vida y un programa de empleo a gran escala para incorporar las grandes mayorías marginadas a la vida económica del país, lo que exige abundantes recursos económicos. Pero, por otra parte, la iniciativa privada no interviene si no tiene resultados previos e incontrostrables, y sólo tributa a la fuerza.

La expectativa de estabilidad política y de pacificación con que la clase dominante recibía a los golpistas el 23 de marzo no ha sido totalmente satisfecha. Actualmente, si bien es cierto que la clase dominante mantiene su apoyo al régimen de Ríos Montt, este apoyo es muy precario y sujeto a múltiples contradicciones. El ejército ha presentado a la clase dominante, mediante una gran desinformación, una situación del país que avanza hacia la pacificación y hacia la derrota del movimiento revolucionario, por lo que aquélla ha adquirido una falsa confianza. Es por ello que las relaciones entre ambos están marcadas por el signo de la oscilación.

Esa situación tiene una expresión privilegiada en las acusaciones que hizo el presidente en su discurso del 5 de septiembre por la cadena nacional de televisión; Ríos Montt habló de "una fuerte y además inteligente iniciativa privada, que se ha empobrecido a la par del resto de la nación, haciendo todo tipo de maniobras sucias y parciales para evitar pagar impuestos, para quedarse con muchos dólares fuera del país en forma ilegal, ayudándonos a ser más pobres...".

El golpe de estado encontró a los políticos guatemaltecos en distintas situaciones. Los partidos Institucional Democrático, Revolucionario y Frente de Unidad Nacional constituían la coalición oficial que había servido a Lucas García y apoyado la candidatura continuista del general Guevara Rodríguez. Para ellos, como es natural, el golpe de estado les quitaba automáticamente toda posibilidad de vigencia política.

El Partido Socialista Democrático y los sectores consecuentes del Frente Unido de la Revolución no habían participado en las elecciones, por la ausencia evidente de las mínimas condiciones para el desarrollo de un proceso electoral, ya que la oposición había sido puesta de antemano fuera de juego por la implacable represión.

En otra situación se encontraban el Movimiento de Liberación Nacional, la Central Auténtica Nacionalista, el Partido Nacional Renova-

dor y la Democracia Cristiana, los dos primeros marcados por el signo de las posiciones más oscurantistas y reaccionarias y los otros dos con planteamientos reformistas a diferentes niveles. Estos cuatro partidos, inmediatamente de producirse el golpe, se pronunciaron apoyando a los militares y ofreciendo su respaldo al nuevo gobierno.

Sin embargo, ese entusiasmo inicial no tardó en esfumarse, al percibirse muy pronto de que los golpistas no manifestaban preocupación por convocar a elecciones y volver a la constitucionalidad. A pesar de los intentos de estos partidos por acercarse al nuevo régimen, la tensión con el gobierno se fue acentuando. A mediados de agosto, varios políticos fueron arrestados bajo el cargo de estar implicados en un complot contra el régimen. La crisis se profundizó con la negativa de los partidos a integrar el Consejo de Estado, organismo asesor creado por Ríos Montt, al que califican como autocrático, asociado a las monarquías absolutistas y no representativo de la voluntad popular.

Finalmente, estos cuatro partidos han constituido el Frente Multipartidario Constitucionalista, afirmando que sus objetivos son la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos y por el retorno a la constitucionalidad y a la democracia formal.

Los sectores estudiantiles, tradicionalmente beligerantes en el país, presentaron muy pronto a los golpistas una serie de contundentes condiciones de confiabilidad. A dos días del golpe, la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- exigía el cese de la represión y el encarcelamiento inmediato de sus responsables en el régimen depuesto, el esclarecimiento de la muerte y desaparición de miles de personas, la disolución de los cuerpos represivos, una baja en el costo de la vida... Es evidente que, de todas esas condiciones de confiabilidad exigidas por los universitarios, no se ha cumplido una sola, y que la dinámica de los acontecimientos ha seguido un rumbo diametralmente opuesto a sus demandas.

Los medios de comunicación apenas pudieron gozar el pretendido aire de libertad propalado por los golpistas. Las primeras críticas o sugerencias hechas por la prensa al nuevo gobierno fueron calificadas por Ríos Montt como "subversivas", calificativo que en Guatemala -- significa ser objeto de represión. Las presiones y amenazas se fueron intensificando hasta llegar al estado de sitio y la censura total de prensa. Recientemente, el Ministro de Gobernación amenazó con clausurar aquellos medios de comunicación que publicaran informaciones consideradas ofensivas por el gobierno.

La jerarquía de la Iglesia guatemalteca recibió con beneplácito al gobierno instalado el 23 de marzo. Una semana después, la Conferencia Episcopal -máximo organismo jerárquico- visitaba a los nuevos gobernantes y manifestaba su complacencia por las garantías ofrecidas a la Iglesia. Pero la escalada represiva que siguió inmediatamente ha obligado a los eclesiásticos a mantener congeladas y aún a reducir sus actividades religiosas y a denunciar la política genocida -- del régimen.

En los primeros días posteriores al golpe de estado, se orquestó una campaña publicitaria destinada a propalar un supuesto "júbilo popular" ante el advenimiento de las nuevas autoridades; se hablaba de que el pueblo se había lanzado a la calle realizando manifestaciones espontáneas u organizadas en apoyo del nuevo régimen... Ciertamente, el pueblo experimentó una pasajera sensación de alivio; pero más por los genocidas depuestos que por los nuevos gobernantes.

En cualquier caso, poco podía durar ese "júbilo" de las capas medias y populares, cuando a los pocos días se autorizaba la liberación de los precios de los artículos de primera necesidad, cuando no se tomaba ni una sola medida destinada a paliar la precaria situación económica, cuando se seguía permitiendo el incumplimiento del pago del salario mínimo, y, sobre todo, cuando la escalada represiva alcanzaba cotas más altas que en el depuesto régimen, llegando al arrasamiento de poblaciones enteras en el interior de la república. Poco podía durar la pretendida imagen del nuevo gobierno, cuando ni siquiera --

se castigaba a los responsables de la represión y la corrupción del régimen anterior.

Estos sectores populares y de capas medias son quienes más directamente sufren los efectos de la crisis económica. En 1980, el desempleo alcanzaba al 34% de la población económicamente activa, según datos de la Secretaría de Planificación Económica. Esta población evoluciona a un ritmo del 1.38% anual, por lo que, para mantener el nivel de empleo existente, habrían de crearse 74,500 nuevos puestos de trabajo anuales. Sin embargo, la política económica de Ríos Montt ha sido la de efectuar despidos masivos en las dependencias estatales y paraestatales, y apoyar a la iniciativa privada en el mismo sentido. Según el Ministro de Trabajo, en 1983 habrá en Guatemala 800,000 desempleados -en un país de siete millones y medio de habitantes!-.

La situación de empobrecimiento, que afecta a las capas medias de modo sensible, se hace dramática en el campo, donde los trabajadores se ven obligados a aceptar salarios muy inferiores a 3.20 dólares -salario oficial-, e incluso a ofrecer su trabajo por la alimentación diaria.

Por otra parte, es suficientemente conocido el descabezamiento y dearticulación que los últimos regímenes han hecho al movimiento sindical y popular en general. Por todo ello, en este contexto social, no tiene ningún sentido hablar de apoyo popular al régimen.

Pero lo más preocupante para el gobierno de Ríos Montt es sin duda la situación interna del ejército. El desplazamiento de la poderosa camarilla luquista no podía menos de producir fricciones en las filas castrenses. En junio, las fricciones se hicieron patentes -- en el seno de la entonces Junta Militar, de la que fueron desplazados los dos vocales para quedar Ríos Montt como único conductor del gobierno. A mediados de agosto, fueron arrestados un general, varios coroneles y varios oficiales más, implicados en un complot contra el régimen. Además de todas esas fisuras y pugnas al inte---

rior de la alta oficialidad, que se disputa posiciones de poder y privilegio, se da el descontento de los oficiales subalternos y de las tropas, que son quienes pagan las más altas cuotas en el combate contra el movimiento revolucionario.

Es comprensible, por otra parte, que un general excéntrico como Ríos Montt no pueda aglutinar y calmar todas esas inquietudes que se dan en el seno de la institución armada. Y parece previsible que el descontento y las fisuras se han de ir acentuando a medida que avanza la crisis y el desarrollo de la lucha revolucionaria en el país.

#### EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL

Como ya señalamos, uno de los objetivos del golpe de estado era mejorar la imagen del país para superar la situación de aislamiento internacional. Nada ha logrado avanzar el nuevo gobierno por ese camino. A niveles diplomáticos y de opinión pública internacional, el golpe fue recibido con escepticismo, sospechando que únicamente significaba un cambio de careta. La práctica llevada a cabo por el régimen en estos meses ha ahondado aún más el aislamiento.

Este se ha profundizado incluso a nivel Centroamericano, donde hasta hace poco Guatemala jugaba un papel hegemónico a niveles diplomáticos. En recientes declaraciones, el presidente de Costa Rica se manifestaba partidario de que Guatemala no fuera admitida plenamente a la Comunidad Democrática Centroamericana la CDCA, creada hace unos meses, esta integrada por Honduras, El Salvador y Costa Rica.

De cara a granjearse el apoyo norteamericano, la retórica del régimen golpista comenzó a manejar desde el primer momento el tema de los Derechos Humanos. El mismo día del golpe, el general Ríos Montt manifestaba su deseo de instrumentar un gobierno "de plena vigencia de los Derechos Humanos de todos los guatemaltecos", asegurando que ya no aparecerían más asesinados. Las nuevas autoridades

prometieron investigar el paradero de los miles de desaparecidos durante los regímenes anteriores, y se declaraban abiertas para que Amnistía Internacional o cualquier otra entidad similar pudiera comprobar in situ la situación de los Derechos Humanos en el país.

La Administración norteamericana no ocultó su satisfacción ante tales declaraciones. A los pocos días, el Embajador en Guatemala, -- Frederick Chapin, era categórico al afirmar que Guatemala merecía -- el apoyo norteamericano por haber mejorado su record en relación -- a los Derechos Humanos: "no hay duda de que están mejorando; no hay duda de que la matanza se ha detenido; el gobierno ha salido de la oscuridad a la luz".

Es Washington, el ejecutivo solicitaba al Congreso la aprobación de 250 mil dólares para el año fiscal 1983, destinados a Guatemala como fondos de entrenamiento militar, cantidad a la que estaba dispuesto a añadir otros 50 mil dólares. Esta medida constituía un -- gesto de buena voluntad hacia el régimen de Ríos Montt, que incluía -- además las presiones de la Administración norteamericana hacia las instituciones crediticias internacionales para que aumentaran sus -- préstamos al régimen guatemalteco. Por aquellas fechas se hizo pública la disposición de Washington de vender a Guatemala repuestos para helicópteros militares por valor de 4 millones de dólares.

Los voceros oficiales del gobierno guatemalteco calificaron de "alentadoras" todas aquellas noticias procedentes de los Estados Unidos: "Los norteamericanos ya comprendieron las buenas intenciones de la Junta...". Sin embargo, tales "buenas intenciones" de los gobernantes no parecían tener concreción alguna en la práctica. Los cadáveres continuaban apareciendo y no se esclareció el paradero de ni una sola persona de las que habían sido secuestradas o desaparecidas.

Con motivo del primero de mayo, las organizaciones populares y democráticas de Guatemala denunciaban ya el incremento de la espiral represiva desde el ascenso de Ríos Montt al poder. El Comité Pro-Justicia y Paz, de inspiración cristiana, denunciaba 11 masacres --

perpetradas por el ejército del régimen entre el 24 de marzo y el 3 de mayo, con un total de 389 personas masacradas; y agregaba: "los hechos de muerte no concuerdan con las palabras y los ofrecimientos de las autoridades militares, que usan el nombre de Dios para sus propios fines".

A mediados de mayo, varios asistentes de senadores norteamericanos visitaron Guatemala, donde manifestaron que la situación estaba cambiando. Pero, ya en los Estados Unidos, declararon que en Guatemala continuaba la violación de los Derechos Humanos.

La sección estadounidense de Amnistía Internacional, en un informe presentado al Congreso norteamericano a primeros de agosto, afirmaba que, desde que Ríos Montt había asumido la presidencia, se había producido una "intensificación de masacres en gran escala de las poblaciones indígenas en el campo", y señalaba que desde abril a finales de julio 2,186 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente en Guatemala. "Las fuerzas de seguridad de Guatemala continúan tratando de dominar las fuerzas de oposición, tanto violentas como no violentas, mediante asesinatos extensivos, sobre todo a base de la ejecución extrasumarial de grandes cantidades de no combatientes rurales, con inclusión de familias enteras...".

Las violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala han sido denunciadas internacionalmente también por otras prestigiosas organizaciones. La organización católica Pax Christi ha señalado que las violaciones han alcanzado "proporciones horribles". El Consejo Católico Holandés para las Misiones, por su parte, señaló recientemente que "la actual ola de terror parece que lleva como objetivo principal desarticular la vida social y la herencia cultural del pueblo indígena y campesino, para así acabar con la resistencia de los que no soportan el peso de siglos de robo, de malos tratos y de persecución".

El 28 de septiembre, Survival International, organización que defiende y promueve los derechos de los pueblos indígenas, acusó al régimen de genocida, en una denuncia formulada en Washington: "Ríos Montt ha realizado una acción antiguerrillera caracterizada por una

campaña de violencia indiscriminada contra la población indígena". Reportó así mismo la citada organización "la masacre de mujeres embarazadas y niños, la violación a mujeres, casos de tortura, y la muerte de varios indígenas calcinados luego que las fuerzas armadas de Ríos Montt les prendieron fuego".

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, en su Boletín Internacional número 2, denunciaba que los "hechos violatorios de los derechos básicos han aumentado en gravedad y cantidad durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt". La Comisión ha podido establecer el seguimiento jurídico de 1205 casos de violaciones a los Derechos Humanos de abril a julio, afirmando que en el mismo período más de 8 mil personas fueron asesinadas, se produjeron 300 masacres colectivas y numerosas aldeas fueron arrasadas, prosiguiendo así mismo la práctica habitual de la tortura. "Las matanzas de campesinos indígenas, las torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos a sangre fría han sido llevados a cabo por fuerzas de seguridad gubernamentales, y dirigidos contra personas implicadas en actividades de oposición al régimen".

El genocidio que se está llevando a cabo en Guatemala constituye verdaderamente una de las mayores atrocidades y de exterminio cultural que haya conocido nuestra época desde el holocausto nazi. La población indígena es el blanco predilecto del ejército, que en esa forma está asesinando siglos de cultura: la gran civilización Maya-Quiché, de cuyos valores es heredero y portador el pueblo indígena guatemalteco en la actualidad.

No obstante, esa dramática realidad y las denuncias citadas no parecen constituir mayores inconvenientes para algunos sectores de la Administración norteamericana.

Mientras los congresistas cuestionan con toda razón las apreciaciones del Departamento de Estado sobre Guatemala, el presidente Reagan continúa su política de acercamiento al país.

En la primera semana de agosto tuvieron lugar en el Congreso esta

dounidense una serie de audiencias para examinar la situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Stephen Bosworth, Subsecretario de Estado para asuntos Interamericanos, afirmó que el gobierno de Ríos Montt había reducido sustancialmente la violencia política, la represión y la tortura, agregando que eran los guerrilleros los responsables de la violencia en la áreas rurales. Por su parte, el Subsecretario de Estado para los Derechos Humanos, Melvyn Levystsky, iba mucho más lejos, al definir al gobierno guatemalteco como "un régimen ejemplar, comprometido en el desarrollo rural, la obtención de la paz y la democracia".

Con ocasión de la presentación de credenciales del nuevo Embajador guatemalteco en Washington el pasado 10 de agosto, Reagan manifestó explícitamente que él apoyaba al régimen de Ríos Montt, lo cual fue interpretado por los observadores como una decisión de comprometer esfuerzos para proporcionar asistencia militar norteamericana en mayor escala a corto plazo, así como para que Guatemala obtenga ayuda económica internacional.

De hecho, la ayuda económica comenzó a reactivarse a partir de finales de agosto de un modo significativo. El Embajador Chapin, en una visita al Congreso de su país, consiguió la aprobación de un préstamo por 10 millones de dólares al gobierno guatemalteco, destinados a un proyecto de vivienda. Y el primero de septiembre, el mismo Chapin firmaba un convenio por 3 millones más, otorgados por la AID para un proyecto de educación extraescolar, a los que se añadían 239 mil dólares como donación. A nadie se le escapa la derivación de la mayoría de esos fondos hacia el Ministerio de la Defensa. El Embajador aseguraba también la ampliación de la ayuda económica; y respecto a la ayuda militar declaraba: "Washington sabe de los cambios que se han producido aquí en materia de Derechos Humanos, y por eso pronto habrá también ayuda militar".

## LA CONTRAINSURGENCIA QUE NO AVANZA

Uno de los objetivos del golpe de estado era, como ya señalamos, tratar de avivar en la medida de lo posible la moral de las tropas, demasiado minada por las acciones guerrilleras. Es por ello que a partir de entonces, mientras se descargaba la responsabilidad de las derrotas en la ineptitud y corrupción de la antigua alta dirigencia militar, el ejército incrementó la política de matanzas y adoptó ciertas tácticas preventivas para evitar en frentamientos armados, especialmente en determinadas zonas de conflicto, con el objeto de no verse nuevamente golpeado de inmediato. De esa manera, pretendía dar un "segundo aire" a sus tropas.

Sin embargo, apenas relanzada la contraofensiva, la contundencia de la lucha revolucionaria causó estragos en las filas oficiales. Según los datos de las organizaciones revolucionarias, en el mes de julio el ejército sufrió al menos 394 bajas, y el ritmo de operaciones se ha mantenido en los meses posteriores.

Mientras tanto, el ejército ha incrementado de manera espectacular las operaciones de guerra psicológica, destinadas a influir sobre la población en general, sobre los miembros y estructuras de las organizaciones revolucionarias y progresistas, sobre la clase dominante y sobre sus mismas tropas y oficiales. Con estas operaciones trata de provocar en la opinión pública una actitud de rechazo hacia el movimiento revolucionario y democrático; de confundir y desmoralizar a sus militantes y desprestigiar a sus direcciones; de engañar y tranquilizar a la clase dominante; y de levantar la moral de tropas y oficiales. En los últimos meses, estas operaciones psicológicas, sin abandonar otros aspectos, se han centrado especialmente en dos'

Mientras el ejército continúa masacrando a la población campesina, él mismo se adelanta a denunciar las masacres, adjudicándose las a los guerrilleros. Ya no son los "hombres desconocidos fuer

temente armados" quienes matan a la población, sino los "subversivos". La prensa da cuenta puntual de los comunicados oficiales, y los camarógrafos de televisión son llevados en helicópteros del ejército a los lugares de las masacres, donde los sobrevivientes, rodeados de metralletas, declaran "libremente" que los autores han sido los guerrilleros.

Por otra parte, se han organizado las "patrullas de defensa civil": grupos de civiles que, en base a fuertes presiones y amenazas, el ejército ha logrado establecer en algunos lugares para que sirvan de primera línea de defensa a sus hombres ante los ataques guerrilleros, y que frecuentemente están integrados por soldados vestidos de civil. La mayoría de los enfrentamientos armados reportados en los últimos meses por Relaciones Públicas del ejército se producen entre estas patrullas y los "subversivos". Con ello se pretende cambiar el signo de la lucha que se da en el país, haciendo aparecer como guerra civil lo que en realidad es la lucha de todo un pueblo que quiere salir del sometimiento al que ha sido sometido por siglos.

A estas alturas puede asegurarse que la campaña de contrainsurgencia continuada por el ejército no le ha dado los resultados apetecidos. En primer lugar la continuación de la política de masacres contra la población ha venido a confirmar de manera fehaciente el carácter esencialmente criminal y antipopular del ejército. En segundo lugar, esa misma práctica genocida ha hecho que se profundice más aún el repudio y rechazo por parte del pueblo hacia el ejército; y, como contrapartida, que se acrecienten la simpatía y el apoyo popular hacia el movimiento revolucionario y democrático.

En este sentido, reviste particular importancia la masiva incorporación del pueblo indígena a la lucha revolucionaria. Ese pueblo, que durante 450 años fue marginado, oprimido y discriminado, y que constituye aproximadamente el 70% de la población total del país, ha encontrado su camino de liberación a través de las organizaciones revolucionarias que, junto a la lucha contra la opre-

sión y la injusticia social, plantean también la lucha contra la discriminación y el desarrollo de los valores culturales indígenas. El combate por la liberación se libra ya hoy en todo el país, especialmente en amplias zonas del norte, centro, noroccidente y suroccidente, zonas con abrumadora mayoría de población indígena.

Esas fuerzas del indígena, unidas a las resto de sectores populares, de las capas medias, e incluso de sectores de la pequeña burguesía, hacen verdaderamente irreversible la revolución guatemalteca.

## EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

Frente a la explotación, la opresión, la discriminación y la represión que sufre el pueblo de Guatemala, la única alternativa es la lucha revolucionaria. Los métodos pacíficos para lograr una mayor justicia económica y social y el establecimiento de un sistema democrático han sido cerrados por el régimen militar, que persiste en el terror y el genocidio como únicos recursos para mantener su autoridad y el statu quo.

La lucha que se libra en el país en contra de la minoría que ha detentado históricamente el poder económico y político tiene ya un carácter amplio y nacional. Campesinos y obreros, estudiantes y profesionales, desempleados y capas pobres de la ciudad, indígenas y ladinos, católicos y evangélicos, hombres y mujeres, sectores democráticos y patrióticos se incorporan masivamente a la oposición activa. Las condiciones objetivas de la crisis empujan en esta dirección cada vez con mayor fuerza. La envergadura de las acciones políticas y militares en contra del régimen así lo demuestran.

El pueblo se ha unido para defenderse y derrotar a quienes le niegan, no sólo condiciones dignas y decorosas de vida, sino tam

bien el mismo derecho a la vida. Para lograr este objetivo, y respondiendo a esa unidad popular, las organizaciones político-militares de Guatemala, Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP-, Fuerzas Armadas Rebeldes -FAR-, Organización del Pueblo en Armas -ORPA- y Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT-, conformaron en enero de 1982 la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca --- -URNG- y sistematizaron en cinco puntos las tareas prioritarias del movimiento revolucionario una vez instalado en el poder.

Este paso estratégico dado por las organizaciones armadas se inscribe dentro de una tendencia unitaria más amplia. Los planteamientos y objetivos de la URNG ya fueron favorablemente acogidos por amplios sectores sociales y políticos del país. Ello permite visualizar para un futuro no lejano la conformación de una amplia alianza política de oposición y lucha contra un sistema que cada día acentúa su carácter antipopular y represivo, lucha que podrá dar paso a la instalación de un gobierno revolucionario, patriótico, popular y democrático.

El programa de gobierno de la URNG se sitúa en los marcos de una concepción democrática, progresista, nacionalista y revolucionaria, que busca promover el desarrollo económico y social orientado a satisfacer las necesidades del pueblo, y a establecer una sociedad justa y armónica.

Transcribimos a continuación los "PUNTOS PRINCIPALES PARA EL PROGRAMA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, PATRIOTICO, POPULAR Y DEMOCRATICO":

- I. LA REVOLUCION PONDRA FIN A LA REPRESION CONTRA EL PUEBLO Y GARANTIZARA A LOS CIUDADANOS LA VIDA Y LA PAZ, DERECHOS SUPREMOS SER HUMANO.

La vida y la paz son derechos supremos del ser humano. La revolución pondrá fin a la represión contra el pueblo y eliminará para siempre el régimen político que se ha atribuido el de-

recho de asesinar a sus opositores para mantener el poder. - Desde 1954, el gobierno de los grandes ricos explotadores y represivos ha quitado la vida a decenas de miles de guatemaltecos por razones políticas. Esa sangre derramada es para la revolución un compromiso de libertad, paz y respeto a la vida.

II. LA REVOLUCION SENTARA LAS BASES PARA SOLUCIONAR LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES DE LAS GRANDES MAYORIAS DEL PUEBLO, AL ACABAR CON EL DOMINIO ECONOMICO Y POLITICO DE LOS GRANDES RICOS REPRESIVOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE GOBIERNAN GUATEMALA.

La causa principal de la pobreza de nuestro pueblo es el dominio económico y político de los grandes ricos represivos nacionales y extranjeros que gobiernan Guatemala. La revolución terminará con ese dominio y garantizará que el producto del trabajo de todos beneficie a los mismos que producen la riqueza con su esfuerzo creador.

Las propiedades de los grandes ricos represivos pasarán a manos del gobierno revolucionario, quien velará porque esa riqueza se utilice para solucionar las necesidades del pueblo trabajador.

La revolución garantizará la realización de una verdadera reforma agraria, proporcionando tierra a quien la trabaje en forma individual, colectiva y cooperativa.

La revolución garantizará la pequeña y la mediana propiedad agraria y repartirá a quienes las trabajen con sus manos la tierra que hoy está en poder de los altos jefes militares, funcionarios y empresarios corruptos, avorazados y represivos.

La revolución garantizará el pequeño y mediano comercio, y estimulará la creación y desarrollo de la industria nacional que Guatemala necesita para desarrollarse.

La revolución garantizará un control efectivo de precios en beneficio de las grandes mayorías, que al mismo tiempo permita una ganancia razonable que no vaya en detrimento del pueblo.

Al arrebatarse el poder a los grandes ricos nacionales y extranjeros, la revolución creará fuentes de trabajo y garantizará por ley salarios decorosos a todos los trabajadores del campo y la ciudad.

El poder en manos del pueblo será la base para solucionar los grandes problemas de salud, vivienda y analfabetismo que sufre la inmensa mayoría del pueblo guatemalteco.

III. LA REVOLUCION GARANTIZARA LA IGUALDAD ENTRE INDIGENAS Y LADINOS, TERMINANDO CON LA OPRESION CULTURAL Y CON LA DISCRIMINACION.

El dominio de los grandes ricos es la causa principal de la opresión cultural y la discriminación que sufre en Guatemala la población indígena. Para terminar con la opresión cultural y con la discriminación, lo primero que se necesita es que la población indígena, como parte fundamental del pueblo Guatemalteco, participe en el poder político.

La participación de la población indígena en el poder político junto a la ladina, nos permitirá solucionar las grandes necesidades de tierra, trabajo, salario, salud, vivienda y bienestar en general que la población tiene en la actualidad.

La solución de esas necesidades es la primera condición para lograr la igualdad entre la población indígena y la población ladina. La segunda condición para garantizar esa igualdad es respetar la cultura y reconocer el derecho que tiene la población indígena a mantener su identidad.

El desarrollo de una cultura que recoja e integre las raíces históricas de nuestro pueblo es uno de los grandes objetivos de la revolución. Indígenas y ladinos en el poder decidirán libremente la fisonomía futura de Guatemala.

IV. LA REVOLUCION GARANTIZARA LA CREACION DE UNA NUEVA SOCIEDAD - DONDE EN EL GOBIERNO ESTEN REPRESENTADOS TODOS LOS SECTORES - PATRIOTICOS, POPULARES Y DEMOCRATIVOS.

La revolución garantizará el derecho del pueblo a elegir sus autoridades locales, municipales y nacionales.

Todos aquellos ciudadanos que con su trabajo, sus conocimientos o su capital puedan y estén dispuestos a que Guatemala -- salga de la pobreza, el atraso y la dependencia, tendrán un lugar en la nueva sociedad. Los empresarios patrióticos que estén dispuestos a contribuir al logro de este gran objetivo gozarán de plenas garantías, sin más condición que su respeto a los intereses del pueblo trabajador.

La revolución garantizará la libre asociación política, la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de credo religioso como formas de posibilitar el aporte de todos los ciudadanos a la construcción de la nueva sociedad.

La revolución juzgará severamente a aquellos enemigos represivos recalcitrantes, a la camarilla de los altos jefes militares y a sus cómplices que son los que han decidido y dirigido la represión contra el pueblo.

La revolución será flexible para juzgar a quienes han recibido órdenes de reprimir al pueblo y tendrá en cuenta a quienes, habiendo recibido órdenes de reprimir al pueblo, se han abstenido de hacerlo.

La revolución terminará con el reclutamiento forzoso y discriminatorio para el servicio militar.

En el nuevo Ejército Popular Revolucionario que el pueblo de Guatemala construirá para garantizar su seguridad y la defensa de la patria, tendrán participación todos aquellos oficiales y soldados patriotas que no se hayan manchado las manos con la sangre del pueblo.

En la nueva sociedad la mujer gozará de iguales derechos que el hombre, en la medida en que comparte con éste obligaciones iguales y aún mayores, por sus deberes de madre. Los niños y los ancianos gozarán de la protección que merecen por el aporte que darán o que ya han dado a la producción de la riqueza social.

La revolución reconoce al pueblo cristiano como uno de los pilares de la nueva sociedad, en tanto que sus creencias y su fe se han puesto al servicio de la libertad de todos los guatemaltecos.

- V. LA REVOLUCION GARANTIZARA LA POLITICA DE NO ALINEAMIENTO Y DE COOPERACION INTERNACIONAL QUE NECESITAN LOS PAISES POBRES PARA DESARROLLARSE EN EL MUNDO DE HOY, SOBRE LA BASE DE LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS.

El no alineamiento con las grandes potencias y la cooperación internacional son una necesidad en el mundo complejo e interdependiente de hoy.

Las inversiones extranjeras son necesarias para los países pobres y deben ser acordadas sobre la base del respeto a la soberanía nacional de cada país, teniendo presentes las necesidades de los pueblos pobres y tomando en cuenta la razonable rentabilidad de las inversiones del capital procedente de otros países. Para ello es indispensable la estabilidad política en cada país. Sin estabilidad política no puede haber cooperación internacional.

La cooperación internacional es posible a pesar de la ideología o del régimen político diferente, siempre que se respete la libre determinación de cada pueblo.



[WWW.CEDEMA.ORG](http://WWW.CEDEMA.ORG)